



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

///Martín, 14 de julio de 2025.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente expediente **FSM 64024/2018/TO1 (registro interno n° 4287)**, caratulado **"Merlo, Oscar Ernesto y otro s/evasión tributaria simple"**, en trámite ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín, sobre la concesión del instituto de la suspensión del juicio a prueba a **FABIÁN ESTEBAN SOTELO**.

RESULTA:

I. Que el 27 de diciembre de 2022 el fiscal de grado requirió la elevación a juicio de las presentes actuaciones, oportunidad en la que consideró que se encontraba acreditado en autos que *"...Fabián Esteban Sotelo en su carácter de gerente y responsable de la firma Organización Noble S.R.L., evadió fraudulentamente mediante declaraciones engañosas y ocultaciones maliciosas, el pago de tributos al Fisco Nacional, más precisamente el Impuesto al Valor Agregado, por los siguientes períodos fiscales: a) septiembre de 2013 a abril de 2014 por la suma de \$1.555.642,10 y b) mayo de 2014 a abril de 2015 por la suma de \$2.921.099,76.*

Asimismo, se encuentra corroborado que Fabián Esteban Sotelo junto con Oscar Ernesto Merlo, en su carácter de gerentes y responsables de la firma Organización Noble S.R.L., evadieron mediante declaraciones engañosas y ocultaciones maliciosas, el pago de tributos al Fisco Nacional, más precisamente el Impuesto al Valor Agregado, por el período fiscal de

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

mayo de 2015 a abril de 2016 por la suma de \$4.761.661,60.

Las maniobras fueron verificadas a partir de las fiscalizaciones llevadas a cabo por la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (documentadas bajo las órdenes de intervención N° 1561266 y 1653911), mediante las cuales se detectó que los responsables de la firma Organización Noble S.R.L. habrían consignado datos inexactos, consistente en el cómputo en sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de créditos fiscales carentes de la debida documentación de respaldo, disminuyendo así el importe de impuesto a ingresar al Fisco Nacional".

Entendió que dicha conducta resultaba constitutiva del delito de "...evasión tributaria simple, previsto y reprimido por el artículo 1° del Título IX- Régimen Penal Tributario de la ley 27.430, reiterado en 2 oportunidades (Impuesto al Valor Agregado 09/2013 a 04/2014 y 05/2014 a 04/2015), por los cuales deberá responder a título de autor (artículo 45 del Código Penal), y al mismo tiempo, por el mismo delito (Impuesto al Valor Agregado 05/2015 a 04/2016), deberá responder en calidad de coautor, todos ellos en concurso real (art. 55 del C.P.)".

II. Que el Dr. Gustavo Facundo Orazi, defensor del imputado Sotelo, solicitó se conceda a su asistido la suspensión del juicio a prueba, conforme art. 76 bis del Código Penal.

En tal sentido, entendió que resultaba aplicable "...la denominada "interpretación amplia" receptada





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

en los precedentes "Acosta" (Fallos, 331:858, del 23 de abril de 2008) y "Norverto" (expediente N. 326. XLI. RHE de la misma fecha) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de la interpretación consagrada en ellos la suspensión del juicio a prueba procede aun en los casos donde el máximo de la pena prevista para el delito supere los tres años de prisión, en tanto exista la posibilidad de una condena condicional.

El delito por el que se ha requerido el enjuiciamiento de mi asistido (art. 1° del Título IX- Régimen Penal Tributario de la ley 27.430,-) se halla reprimido con una pena mínima de dos años de prisión, es decir, inferior en un tercio a la pena respecto de la que resulta aún admisible la condenación condicional (la "que no exceda de tres años", según reza el art. 26 del C.P.). Por ende, con alta probabilidad, la pena que en concreto se individualizaría según los arts. 40 y 41 del C.P. (aun cuando no fuera la mínima prevista en la escala) podría ser impuesta en suspenso según la ley aplicable".

Por otro lado, destacó la ausencia de antecedentes penales por parte de su asistido.

En cuanto a lo previsto en el último párrafo de dicho artículo (que dice que la suspensión no procederá cuando el proceso verse sobre un ilícito reprimido por las leyes nro. 22.415 o nro. 24.769 y sus respectivas modificaciones) señaló que existe jurisprudencia que ha admitido que el instituto puede ser aplicado, citando los fallos que consideró pertinentes.

Al respecto, sostuvo que el caso en estudio no reviste transcendencia en materia tributaria puesto

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

que la imputación no ha sido agravada por alguna de las circunstancias previstas por la ley.

Por otro lado, recordó que Sotelo ha gozado en el pasado del beneficio que aquí solicita, indicando que se le otorgó la suspensión del juicio a prueba en el marco de la causa que tramitó por ante Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 departamental (causa FSM n° 1056/2013 - registro interno 2757), el 13 de abril de 2016, por el término de un año.

Sobre el punto, señaló que en la causa que nos ocupa, se le imputan a su asistido períodos anteriores al otorgamiento de dicho beneficio, considerando entonces que no habría impedimento de otorgarle el beneficio por segunda vez puesto que si ambas causas hubiesen tramitado en forma conjunta (y no de manera paralela sólo por falta de acumulación en virtud de las demoras en la fiscalización), no hubiese existido impedimento para otorgar el beneficio por todos los períodos. Agregó que lo mismo hubiera sucedido si antes de la extinción de la acción penal en las reseñadas actuaciones, el Fisco Nacional hubiera promovido la pertinente denuncia, debiendo procederse a una unificación (períodos anteriores correspondientes al mismo delito).

Afirmó que, en los términos de la ley, lo que a Sotelo le correspondería no es una segunda suspensión del juicio a prueba, pues la presunta evasión que se pretende juzgar terminó de cometerse antes de que la suspensión del juicio a prueba ya aludida hubiera sido siquiera acordada por los magistrados del TOF 1 departamental. Así, sostuvo que como los dos procesos que afrontó su defendido debieron haber sido paralelos, no

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

debe impedirse la suspensión aquí pretendida, ya que los presuntos hechos de evasión hubieran sido objeto de un único proceso, como presunto concurso real de delitos, el mínimo de la escala (mínimo mayor entre las escalas de los delitos concurrentes -art. 55 del C.P.-) hubiera sido de dos años de prisión, es decir, una pena que en abstracto aún no se encuentra fuera de las previsiones en las que es posible la condenación condicional.

Por último, ofreció el pago de la suma de pesos argentinos cinco millones (\$5.000.000,00), en diez (10) pagos mensuales y consecutivos de pesos argentinos quinientos mil (\$500.000,00) y solicito que se le imponga a su asistido la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato; y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

II. Cursada la vista correspondiente al Sr. Fiscal General, el Dr. Carlos Cearras consideró que el planteo de la defensa no era procedente.

Indicó que, si bien la escala penal establecida para el delito endilgado a Sotelo resultaría aplicable al caso; lo cierto es que la Ley n° 26.735 (B.O. 28/12/11) modificó el último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal que impide el otorgamiento del beneficio en cuestión respecto de los ilícitos reprimidos por la Ley n° 24.769 y sus respectivas modificaciones.

Agregó que, más allá de que ese argumento habilitaría por si sólo el rechazo de la aplicación del instituto requerido, entendió que la suma monetaria

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

ofrecida por la defensa del encartado, en concepto de reparación, resultaba irrazonable en atención a la inflación imperante desde el momento de los hechos imputados hasta el presente, así como también la forma de instrumentación de pago.

Por todo ello, sostuvo que debía rechazarse la solicitud efectuada en favor de Fabián Esteban Sotelo.

No obstante, en virtud del principio de bilateralidad, contradicción e inmediatez, peticionó que se fijara fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 293 del ritual, y que se convocara al denunciante o Representante Legal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A.) en atención a lo estipulado en los artículos 2°, 3° y 5° inciso "k" de la Ley 27.372 -Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos-.

III. Por su parte, el Dr. Gustavo Javier Andorno Revora, representante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, adhirió a la postura del Ministerio Público Fiscal en el entendimiento que no procede la aplicación del instituto en delitos penales tributarios.

Ello así, toda vez que el objeto de la presente causa se encuentra conformado por la evasión del Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 09/2013 a 04/2014, 05/2014 a 04/2015 y, 05/2015 a 04/2016 por las sumas de \$ 1.555.642,10, \$ 2.921.099,76 y \$ 4.761.661,60, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio, conducta encuadrada en el art. 1° de la Ley 27.430.

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

En consecuencia, entendió que, tratándose de un delito tributario, de corresponder, sólo resultaría aplicable la figura extintiva por pago específica que se encuentra establecida en el art. 16 del Régimen Penal Tributario, resultando improcedente lo aquí petitionado según el Código de fondo.

Finalmente, señaló que los delitos tributarios se encuentran regulados en una norma especial (Título IX de la Ley N° 27.430) y en consecuencia, conforme la previsión del art. 4° del C.P., ésta debe primar respecto de lo prescripto por la Ley 27.147, en su art. 59, inc. 6, que es una norma general.

IV. Que el día 3 de julio del corriente año tuvo lugar la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN, cuyas circunstancias ilustra el acta incorporada al sistema Lex 100.

En dicha ocasión, tal como hiciera en el escrito agregado al expediente, el Dr. Orazi solicitó se le conceda a su asistido el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, remitiéndose a los argumentos oportunamente esgrimidos.

Asimismo, destacó que actualmente la jurisprudencia se está expidiendo en favor de la concesión del citado instituto para los delitos tributarios como los aquí investigados, ya que se efectúa una interpretación en función de la voluntad real del legislador que surge del debate parlamentario. En tal sentido, entendió que la intención fue que los casos que debían llegar a juicio sean los de mayor gravedad, no siendo este el caso.

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

Además, resaltó que los montos evadidos no superan por mucho el mínimo legalmente fijado, por lo que debía adoptarse la tesis amplia establecida en los fallos "Aosta" y "Cambiasso".

Sin perjuicio de ello, señaló que Sotelo ya había sido beneficiado con una probation otorgada en el año 2016 por el Tribunal Federal nro. 1 de San Martín por periodos anteriores a los aquí imputados. Agregó que los hechos de la presente causa ya se encontraban investigados, por lo que esos periodos podrían haber sido incluidos en aquella probation.

Por otro lado, resaltó que, mientras formaba parte de la sociedad, su asistido se acogió a un plan de pagos, el cual cumplió satisfactoriamente. Luego, vendió su empresa -descontándose del dinero que recibió el monto de la deuda-, motivo por el cual perdió cualquier tipo de decisión sobre la continuación de esos de pagos.

Finalmente, ofreció el pago de una reparación del daño de 5.000.0000\$, en diez cuotas consecutivas, y la realización de trabajos comunitarios.

Posteriormente, concedida la palabra al representante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Dr. Andorno Revora, disintió con la defensa en cuanto consideró que si la voluntad del legislador hubiese sido otra, no hubiera incluido en el art. 76 bis a los delitos tributarios entre los excluidos para la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba.

Por otro lado, en cuanto a los hechos aquí

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

que los montos evadidos constituían el delito de evasión agravada, razón por la cual, a diferencia de la defensa, entendió que no eran hechos menores. Indicó que, en el año 2017, con la modificación de la ley, se elevaron los montos y pasaron a constituir una evasión simple.

De seguido, destacó que en el fallo "Costa" la CSJN ha establecido con claridad cuando debe concederse la suspensión del juicio a prueba, estableciéndose que en el caso de leyes especiales no era aplicable. Sumando a ello, destacó que posteriormente se modificó el Código Penal, zanjando la cuestión.

Finalmente, expresó su oposición a la aplicación del instituto, no solamente por las razones legales ya expuestas, sino porque el sistema normativo brindaba la posibilidad de que Sotelo continuara pagando de manera solidaria la deuda de la empresa, circunstancia que no dio en el presente caso.

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Carlos Cearras, coincidió con muchos de los argumentos esgrimidos por el representante del fisco y se opuso a la concesión de la suspensión de juicio a prueba, conforme lo dispuesto en el art. 76 bis del C.P., en cuanto a la prohibición de otorgar el beneficio en el caso de los delitos tributarios. Además, entendió que la ley vigente lo exime de tratar otras cuestiones.

Por otro lado, respecto de los montos, también consideró que los hechos aquí imputados resultan ser del año 2014, por lo que se debe tener en

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

cuenta la inflación que sufre nuestro país, lo cual en muchos casos torna irrisorias las sumas de dinero.

No obstante, superan la condición objetiva de imputabilidad y se encuentran abarcados por la ya citada normativa.

Por lo expuesto, solicitó se rechace el pedido efectuado por la defensa.

Otorgada nuevamente la palabra al Dr. Orazi, aclaró que, si bien la normativa permitía el pago solidario de la deuda, también existían cuestiones fácticas que lo dificultaban, como la imposibilidad de seguir operando con la clave fiscal de la empresa, de generar boletas de pago, entre otras.

Por otro lado, destacó que al momento de los hechos el monto de la condición objetiva de punibilidad ya se encontraba atrasado respecto a los que había considerado el legislador en la última modificación de la ley tributaria.

Y CONSIDERANDO:

Llegado el momento de resolver, entiendo que ante la ausencia del consentimiento fiscal exigido por el artículo 76 bis del C.P. para la concesión de la suspensión de juicio a prueba, corresponde rechazar el pedido formulado en tal sentido por la defensa oficial de Fabián Esteban Sotelo.

Ello, en tanto entiendo que la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal al otorgamiento del mentado beneficio resulta fundada y satisfacen las exigencias de logicidad y motivación que impone la doctrina del plenario "Kosuta" de la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

Cámara Nacional de Casación Penal, pues los argumentos brindados a tal fin constituyen una derivación razonada del derecho vigente, en tanto se remite a los límites establecidos en el artículo 76 bis del C.P.

Debo enfatizar que la revisión por parte de la suscripta sobre la falta de consentimiento fiscal se circunscribe a evaluar si éste ha sido motivado y no a considerar si se está de acuerdo con su fundamentación.

Así la oposición resulta vinculante, de acuerdo a lo previsto en el art. 76 bis del Código Penal y la interpretación jurisprudencial mayoritaria referida al tema que nos ocupa, en la que se destaca la titularidad del Ministerio Público Fiscal para el inicio y ejercicio de la acción pública, de acuerdo con el régimen legal vigente (artículos 120 de la Constitución Nacional, 25 de la ley 24.946, 71 del Código Penal y 5 del Código Procesal Penal de la Nación).

Vale señalar aquí que *"...Según la doctrina del plenario "Kosuta", no modificada en ese aspecto por el fallo CS "Acosta", la oposición debidamente fundada del fiscal impide la concesión de la probation..."* (CFCP, Sala I, Registro n° 13292.1, "Rodríguez, Ernesto Manuel s/recurso de casación", resuelta el 04/03/09).

Por todo ello, de conformidad con lo establecido por el art. 32, apartado II, inc. 1° del C.P.P.N. (texto según ley 27.307).

RESUELVO:

NO HACER LUGAR al pedido de suspensión de juicio a prueba efectuado en favor del imputado **FABIAN ESTEBAN SOTELO**.

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5

64024/2018/TO1

Notifíquese, regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 10/2025 CSJN). Firme que sea prosígase con el trámite de la presente causa.

En igual fecha se cumplió. Conste.

Fecha de firma: 14/07/2025

Firmado por: MARIA CLAUDIA MORGESE MARTIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLARA MASSARI, Secretaria Ad Hoc



#37484651#463797799#20250714120031776